

GRAN LANSKA: EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA
Página 2

PROYECTO ATLANTICO: SECAR EL MEDITERRANEO
Página 14

¿SE PUEDE CRITICAR EN ALEMANIA LA POLÍTICA DE BRUXEL?
Página 5

EL GRAN DESDEAFECTO
Página 14

LE MONDE *en español* diplomatique

DOSSIER ESPECIAL: FRANCIA EN EBULLICIÓN

Un pueblo en pie, un poder obstinado

¿El apellido, a día de hoy, lleva consigo un estigma. Desde que el 11 de marzo de 2015 se produjo el atentado contra la escuela de la ciudad de París, el apellido se ha convertido en un estigma. Desde entonces, los franceses se han convertido en un pueblo en pie, un poder obstinado.

En el momento de la publicación de este artículo, el gobierno francés se enfrenta a una crisis política sin precedentes. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una oposición que ha crecido en popularidad y a una crisis de confianza que ha llevado a la dimisión de su primer ministro, Jean Castex.

El gobierno francés se enfrenta a una crisis política sin precedentes. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una oposición que ha crecido en popularidad y a una crisis de confianza que ha llevado a la dimisión de su primer ministro, Jean Castex.

El gobierno francés se enfrenta a una crisis política sin precedentes. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una oposición que ha crecido en popularidad y a una crisis de confianza que ha llevado a la dimisión de su primer ministro, Jean Castex.

El gobierno francés se enfrenta a una crisis política sin precedentes. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una oposición que ha crecido en popularidad y a una crisis de confianza que ha llevado a la dimisión de su primer ministro, Jean Castex.

UNA DEDICIÓN INSTRUMENTALIZADA

Vacunas y covid, las raíces de una desconfianza

Por el ministro francés de Salud, Olivier Véran, el 20 de mayo de 2021.

REENCUENTRO ENTRE TEBE Y BAY FERO

Pekín, ¿hacedor de la paz en el Golfo?

Por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, el 20 de mayo de 2021.

De Venezuela a Perú, Occidente decide cuál es el apóstol

Los marxistas, expulsados por el turismo y la casa

Por el ministro francés de Turismo, Jean-Sebastien Esclapez, el 20 de mayo de 2021.

1

Dossier de Le Monde Diplomatique: Reforma de las pensiones en Francia, la onda expansiva

Un pueblo en pie, un poder obstinado

La política de ordeno y mando del Ejecutivo y la brutalidad policial evidencian el nerviosismo de las autoridades francesas. Y con razón: la protesta contra la reforma de las pensiones lleva el germen de un rechazo al orden social que defiende el Gobierno francés.

2

por **Benoît Bréville**, abril de 2023

¿Es posible, a día de hoy, hacer retroceder a un Gobierno, frustrar una decisión adoptada por el poder? Hasta hace no mucho, en Francia la respuesta era que sí, por descontado. Cuando se enfrentaba a movimientos sociales prolongados, resueltos y organizados, que sacaban a multitudes a las calles, el Gobierno a veces se daba por vencido. Y su retirada era la demostración de que la ciudadanía puede hacerse oír fuera de los periodos electorales, a los que no puede reducirse la vida democrática. De esa forma pasaron a mejor vida los proyectos más diversos: la ley sobre la autonomía de la escuela privada en 1984, la ley sobre la selección en la universidad en 1986, el contrato de inserción profesional en 1993, el “plan Juppé” en 1995... Ocurría incluso que los promotores de una reforma impopular se veían obligados a dimitir, como sucedió con el ministro de Enseñanza Superior Alain Devaquet en 1986 o con el de Educación Nacional Claude Allègre en 2000.

Pero desde 2006 y la victoriosa lucha contra el contrato de primer empleo (CPE), no ha vuelto a ocurrir nada semejante en Francia. No importa cuántos manifestantes haya ni cuál sea la

estrategia, marchas ordenadas o agitadas, huelga de brazos caídos, ocupaciones de universidades o acciones espectaculares; ha sido enlazar un fracaso con otro: la lucha contra la autonomía universitaria en 2007, la batalla por las pensiones en 2010, las movilizaciones contra las “leyes laborales” en 2016 y 2019, contra el software de selección en la enseñanza “Parcoursup” en 2018... En el mundo de ahora, el “modelo Thatcher” ha hecho escuela: los Gobiernos ya no retroceden. Ni ante montañas de basura sin recoger, gasolineras desabastecidas, trenes cancelados, aulas cerradas y cortes de carreteras. Aguantan con entereza tanto las perturbaciones en el metro como las manifestaciones semanales o cotidianas. Y cuando la situación se vuelve insostenible, lo solucionan con requerimientos y represión. Algunos han convertido incluso tal dureza en un atributo de quien ejerce el poder en la República: “resistir a la calle” demuestra supuestamente sentido de Estado y valentía política.

De eso mismo alardeaba el ex primer ministro Édouard Philippe ante los alumnos de una reputada escuela de ciencias empresariales: “Nunca se sabe qué gota será la que colme el vaso. [...] En 2017, hacemos las Ordenanzas Laborales. Yo pienso y me digo que va a armarse una buena. Porque recuerdo las Ordenanzas Laborales de dos años antes, manifestaciones enormes, tensión máxima. Pero hacemos las Ordenanzas Laborales y cuela. Reformamos la SNCF, acabamos con el estatuto de los ferroviarios y nos abrimos a la competencia, esperamos bloqueos totales. Y tampoco es para tanto, hay huelgas, y cuela. Decimos que se va a poder acceder a las universidades, a la enseñanza superior, con medidas de orientación selectiva; si estáis mínimamente enterados de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos veinte o treinta años, sabéis que esto es una bomba. Lo hacemos, se ocupan universidades, las desocupamos, ¡y cuela!” (1). Luego vino el

movimiento de los chalecos amarillos, que demostró que las cosas no siempre colaban.

Y por eso Emmanuel Macron se ha mantenido firme, esperando que “colaría” una vez más. Ha impuesto su reforma de las pensiones con brutalidad, ignorando un movimiento de protesta cuyo alcance y determinación debería haber percibido. En nueve ocasiones, respondiendo a la convocatoria de una junta intersindical inusualmente unida, millones de personas han salido a la calle, y eso tanto en las grandes ciudades como en pequeños pueblos que nunca habían visto semejantes movilizaciones. Los sondeos de opinión, que por lo general apasionan al Elíseo, contabilizaban hasta un 70% de opositores a la reforma, y hasta un 90% si solo se preguntaba a los trabajadores en activo, cifras que iban en aumento conforme el Gobierno desplegaba su “pedagogía” y los ciudadanos desmontaban las mentiras ministeriales: no, la reforma no es “necesaria”, ni “justa”, ni “protectora de las mujeres”, y no, no garantiza una “pensión mínima de 1200 euros” para todos. Pretender que la gente trabaje dos años más entraña un riesgo; que se informen, que lo comprueben.

Dócil ante la Unión Europea, que recomienda esta reforma, pero incapaz de convencer a los franceses y a sus diputados, Macron ha elegido imponer el proyecto por las bravas. Ha utilizado todas las artes imaginables para limitar la duración de los debates parlamentarios (artículo 47.1 de la Constitución), cerrar las discusiones sobre un artículo en cuanto “hayan intervenido al menos dos oradores de opinión contraria” (artículo 38 del reglamento del Senado, utilizado por primera vez desde su entrada en vigor en 2015, que ha permitido despachar a la carrera la cuestión del aplazamiento de la edad legal de jubilación) y obligar a los senadores a pronunciarse sobre la reforma en su conjunto y no artículo por artículo (artículo 44.3). Por último, el 16 de marzo de 2023, el Gobierno

de Elisabeth Borne desenfundó el famoso 49.3, que autoriza a prescindir del voto de los diputados. Un método original para un presidente que tantas veces va de paladín del mundo libre, fustigando en discursos y más discursos a “autócratas” y “regímenes autoritarios” que no echan cuenta a la opinión de la ciudadanía, convierten en títere al Parlamento y silencian a la oposición.

Resumiendo, su reforma de las pensiones, que va a repercutir en la vida de los franceses durante varias décadas, solo la han votado unos senadores designados por sufragio indirecto, que han puesto por cierto gran esmero en proteger su propio régimen especial al tiempo que suprimían los de los demás. Los dos años de trabajo adicionales impuestos sin la aprobación de la Asamblea Nacional descansan así sobre la única legitimidad de una institución dominada por un partido (Les Républicains) que no superó el 5% de los votos en las últimas elecciones presidenciales y en la que no figuran dos de las principales formaciones (el Reagrupamiento Nacional [RN] y La Francia Insumisa [LFI]).

Macron, por su parte, no ve dónde está el problema: la reforma estaba en su programa presidencial, ganó las elecciones, y eso significa que los franceses la aprueban. La “multitud” no tiene “legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus representantes electos”, dijo el 21 de marzo en una de sus peroratas. Hace un año, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, apenas se habló del tema de las pensiones –con el añadido de que Macron se negó esta vez a debatir con sus competidores, como sí lo había hecho cinco años antes–, relegado detrás de la inmigración, la guerra de Ucrania, la inseguridad... Y el presidente saliente solo obtuvo los votos del 20,7% del censo electoral. En cuanto a la segunda vuelta, su victoria fue en gran parte el resultado de un voto por defecto, como él mismo reconoció la noche del 24 de abril de 2022: “Sé

que muchos de nuestros compatriotas me han votado no para apoyar las ideas que propongo, sino para cerrar el paso a la extrema derecha [...] Soy consciente de que este voto me marca una responsabilidad para los años venideros. Soy el depositario de su sentido del deber, de su apego a la República y del respeto a las diferencias que se han manifestado en las últimas semanas”. Un compromiso que cayó en el olvido en menos tiempo del que tardó en contraerse.

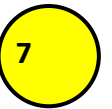
6



VONN CUMMINGS SUMNER.
– *Warrior Moving* ('Guerrero en acción'), 2014

Desde su elección, Macron se dedica esencialmente a ignorar o aplastar cualquier forma de oposición. Durante la anterior legislatura, la Asamblea quedó reducida al papel de cámara de aprobación automática, donde la mayoría presidencial votaba a coro cualquier proyecto del Gobierno; en lo que se ha convertido ahora es en felpudo. Cuestiones tan esenciales como la guerra en Ucrania, el suministro de armas a Kiev y las sanciones contra Rusia no se someten a un debate en

condiciones refrendado por una votación. El presupuesto de 2023 se impone a decretazos con el artículo 49.3 (nada menos que en diez ocasiones), la reforma del seguro de desempleo es objeto de una tramitación acelerada y medidas controvertidas se introducen a hurtadillas en tal o cual decreto. En cuanto se expresa un desacuerdo, Macron opta por la vía directa, ignorando los contrapoderes, sin siquiera dignarse a dar audiencia, por más que lo han solicitado una y otra vez, a los sindicatos movilizados contra la reforma de las pensiones.



Esta arrogancia solo puede alimentar la desazón democrática y reforzar la sensación de que el juego político está cerrado a cal y canto, todo para mayor beneficio del Reagrupamiento Nacional, la extrema derecha. La reforma de las pensiones concentra en efecto “buena parte de los mecanismos hoy identificados por la ciencia política como alimentadores del resentimiento social, que a su vez alimenta a los partidos populistas de la derecha radical”, explican los investigadores Bruno Palier y Paulus Wagner (2). Debilitará en primer lugar a las clases medias bajas y a las personas que sufren penosidad laboral, dos caladeros electorales para la extrema derecha. También ilustra la soberbia de las “élites” frente a la cólera popular, su propensión al engaño, a la mentira y al disimulo para conseguir sus fines, al tiempo que evidencia el deterioro institucional. Si se lo ponen así de fácil, seguro que Marine Le Pen sabrá echar mano de estos argumentos cuando llegue el momento.

Además de favorecer a un partido percibido como el de los parias, la política del desprecio incita a los electores a desentenderse. Desde luego, ¿para qué votar? Y especialmente por una Asamblea Nacional hoy convertida en un teatro de sombras de cuestionable legitimidad. Ya en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de junio de 2022, la abstención superó el 53% de los electores inscritos. Algunos ni siquiera

sabían que se estaba celebrando una votación. “Si sumamos el 5-6% de no inscritos al 53% de abstencionistas, llegamos a que seis de cada diez franceses ya no votan en las elecciones legislativas. Estamos en una situación en la que, como mucho, el grupo mayoritario en el Parlamento ha sido designado por un tercio o incluso un cuarto de los franceses”, observa el politólogo Jean-Yves Dormagen (3). Y lo que ocurre, prosigue, es que quienes acuden a votar tienen un perfil muy marcado: “La probabilidad de que voten las personas de edad madura y los graduados universitarios es del 80%, y la de que no lo hagan los jóvenes con poca o ninguna titulación académica también del 80%”. Pero, precisamente, clases altas, graduados universitarios y jubilados forman el núcleo del electorado del presidente y de la derecha, mientras que jóvenes, no titulados y habitantes de barrios populares engrosan generalmente las filas del RN y de LFI. Macron no tiene por qué cortarse: esta “democracia de la abstención” le beneficia. Y qué más da si se amplía la brecha entre los representantes electos y los ciudadanos, si se erosiona la legitimidad del Parlamento, si la desconfianza política se agrava hasta el punto de que algunos diputados piden ahora protección policial.

En 1922, la Internacional Comunista llegó a exigir que “nueve de cada diez puestos electorales de los que disponga el partido sean ocupados por obreros, y ni siquiera por obreros convertidos en funcionarios del partido, sino por obreros que estén todavía en la fábrica y en el campo”. Los representantes del pueblo debían compartir “sus conceptos vitales, sus usos y costumbres”. Un siglo más tarde, la Asamblea Nacional francesa solo cuenta con cinco obreros entre sus 577 miembros, es decir, menos del 1% de los diputados, cuando este grupo social representa el 16% de la población. La mayoría presidencial (Renaissance, MoDem, Horizons) registra hasta un 61,4% de ejecutivos y profesiones intelectuales superiores, por solo un 2% de empleados y ningún obrero. La mayoría de

estos diputados –abogados, consultores, banqueros, directores de empresa, médicos, creadores de *startups*– solo tienen un conocimiento lejano de la realidad concreta del país. Con la seguridad que de cara a la futura vejez les dan sus pensiones complementarias y un buen colchón de ahorros, fueron incapaces de percibir la cólera que provocaría la reforma de las pensiones entre una ciudadanía ya castigada por la inflación y atormentada por las crisis sanitaria, geopolítica, energética y climática...

Craso error: a contrapié del endogámico mundillo parlamentario, la movilización contra el aplazamiento de la edad legal de jubilación sorprende por su extrema heterogeneidad social. ¿Qué tienen en común los estudiantes, a menudo procedentes de sectores sociales privilegiados, y los operarios de limpieza de los hospitales? ¿Los basureros de las metrópolis y el sector de la investigación? ¿Los técnicos de mantenimiento ferroviario y los médicos privados? Esta reforma, como otras tantas, simboliza a sus ojos la brecha insalvable entre unos dirigentes decididos a meterle marcha atrás a la sociedad y la profunda aspiración de los ciudadanos a proteger –y mejorar– las instituciones que hacen posible una vida feliz, decente y con sentido. De repente, y en perjuicio propio, el Gobierno ha expuesto todas las vergüenzas del sistema económico. Porque la inevitable consecuencia de obligar a trabajar dos años más a los asalariados menos cualificados, y especialmente a las mujeres, es que surgen preguntas: ¿trabajar en qué, por qué y al servicio de quién?

Para estas, empleadas de los servicios esenciales de la educación, la sanidad, la limpieza y la asistencia a las personas, significa añadir 24 meses al agotamiento de una carrera profesional jalonada por los recortes de personal, el ensañamiento frío de unos gestores obsesionados con los indicadores, la rapacidad de contratistas privados o públicos

capaces de organizar la agonía de ancianos en condiciones indignas mientras recomiendan a las auxiliares de enfermería que multipliquen cursillos de “humanidad”. Para aquellos, obreros y técnicos de los sectores del transporte, la energía, la electricidad y las telecomunicaciones, de esas grandes empresas antes públicas que tejieron las infraestructuras de los países occidentales y que, como tales, se beneficiaron de regímenes especiales aniquilados uno tras otro por los “reformadores”, habrá que asistir e incluso colaborar durante dos años más en la erradicación de cualquier carácter de utilidad colectiva, en un trabajo hoy por hoy destinado a “producir valor para el accionista” o a saldar la deuda.

Por eso, puede que el revuelo causado por el decretazo gubernamental se deba a la importancia de las cuestiones subyacentes a la ley y a la forma en que se ha impuesto. Forzoso es que estalle la contradicción entre, por una parte, un régimen económico que prospera gracias a la comercialización de fundas multicolores para teléfonos móviles, derechos a contaminar o agua de glaciario derretida a 11 euros la botella y, por otra, una población cada vez más asqueada ante el espectáculo de una política reducida a elegir entre distintas formas de perpetuar un modelo inepto. Si desertar, dejar un trabajo inútil para empezar otra cosa en otro lugar, es una opción que requiere recursos y no resuelve nada, la amplitud de la “gran renuncia” observada a ambos lados del Atlántico, incluso entre los titulados de las escuelas más prestigiosas, indica un agotamiento del sistema y una necesidad de esperanza. En 2018, esta esperanza se encarnó en los chalecos amarillos. La cólera suscitada por la reforma amplia y generaliza aquella revuelta.

Ya van cundiendo las comparaciones. “Por 284.000 chalecos amarillos, en el punto más alto de la movilización, Emmanuel Macron dejó caer 13.000 millones, simplemente porque había

violencia –observa el secretario general de la CFDT, Laurent Berger (4)–. Según la Policía, somos 1,5 millones en la calle, con dignidad y sin violencia, ipero nadie se digna a recibirnos!”. “Nuestros afiliados nos hacen preguntas –coincide el presidente de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), Cyril Chabanier–. ¿Tenemos que recurrir a la violencia para que nos escuchen? (...) ¿Hay que hacer destrozos para conseguir algo?” (5).

Las protestas no cejan. Arrecian, hay más tensión y nadie sabe cómo acabarán las cosas. El Consejo Constitucional debe pronunciarse en abril sobre la validez de la reforma (véase el artículo de Lauréline Fontaine). Pero, sea cual sea su decisión, todo esto no habrá pasado en balde. Pisotear la dignidad de un pueblo tiene consecuencias: dieciocho años después, millones de franceses recuerdan aún el referéndum del 29 de mayo de 2005 sobre el Tratado Constitucional Europeo y cómo el Gobierno y los parlamentarios desoyeron su voto. “Según varias personas de su entorno –por lo que nos dicen (6)–, al presidente de la República no le pesan ‘ni escrúpulos, ni arrepentimiento’”. Que no tenga escrúpulos, démoslo por seguro. Lo del arrepentimiento está por ver.

(1) Intervención de Édouard Philippe en los “Mardis de l’Essec”, 18 de mayo de 2021.

(2) Bruno Pallier y Paulus Wagner, “Les lendemains politiques d’une réforme contestée”, La Grande Conversation, 15 de marzo de 2013, www.lagrandeconversation.com

(3) Citado en *Le Figaro*, París, 14 de junio de 2022.

(4) Entrevista al *Journal du dimanche*, París, 12 de marzo de 2023.

(5) Citado en *L’Opinion*, París, 10-11 de febrero de 2023.

(6) *Le Monde*, París, 19-20 de marzo de 2023.

Benoît Bréville
Director de *Le Monde diplomatique*.

Horror, estupor, terror... ¡Alegría!

por **Pierre Rimbart**, abril de 2023

Horror

12

El 17 de marzo de 2023, al día siguiente de las manifestaciones espontáneas contra el recurso al artículo 49.3, LeFigaro.fr se hizo con serias posibilidades de ganar el próximo premio Pulitzer gracias al siguiente reportaje: “Una calzada limpia en el 2.º distrito [de París]; los comerciantes, conmocionados. En la calle de Petits-Champs (2.º distrito), cerca de las Tullerías, la calzada ha sido limpiada tras los violentos sucesos de la víspera, pero los comerciantes siguen conmocionados: ‘Volcaron todas las papeleras, fue impresionante’, afirma una estanquera a nuestro periodista, Éloi Passot. A unas cuantas calles de allí, rompieron el escaparate de [un establecimiento] Monoprix”.

Estupor

Dos días después, los manifestantes siguen tomando las calles y un faldón barre la pantalla de la cadena CNews: “¿Hay razones para temer el regreso del comunismo?”.

Terror

Con su acostumbrado sentido de la medida, el editorialista del periódico de la patronal *L’Opinion* denuncia en su edición del 15 de marzo de 2023 “el sabotaje democrático permanente” perpetrado, según él, por Francia Insumisa: “No es folclore trotskista ni una trasnochada nostalgia jacobina. Es una verdadera labor de zapa: metódica, sistemática, ideológica. Hay que tomarse muy en serio cómo Francia Insumisa, y con él una parte cómplice de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), sabotea nuestras instituciones. Para la izquierda radical, la

fatiga democrática y la impopular reforma de las pensiones son una ocasión para ensayar a tamaño real la ‘insurrección ciudadana’ soñada por Jean-Luc Mélenchon. Su programa: el caos. Su política: el terror”.

Alegría

Mientras aguardan el “regreso” del comunismo y la instauración del Terror melenchoniano, los accionistas de las grandes empresas mundiales cosecharon en 2022 más de 1,5 billones de euros en dividendos, más que la riqueza producida por España en el curso de ese mismo año. Según los economistas Isabella Weber y Evan Wasner, la tasa de beneficio de las empresas estadounidenses (16% del valor añadido bruto) batió un récord que databa de... 1945. En Francia, los propietarios se han hecho con más de 80.000 millones de euros en el ejercicio correspondiente al año 2022, lo que equivale al 3% del producto interior bruto: eso es treinta veces del déficit de los fondos de pensiones que se calcula para este año y 4,5 veces el importe de lo que se esperaba “ahorrar” con la versión inicial de la reforma.

Los accionistas de la petrolera TotalEnergies, del gigante del lujo LVMH, de la farmacéutica Sanofi, del grupo automovilístico Stellantis, de la aseguradora Axa y de los bancos BNP Paribas y Crédit Agricole arramblan ellos solos con la mitad de ese dineral. En teoría, los dividendos remuneran los riesgos que corren quienes aportan capital. En la práctica, estos últimos no tienen nada que temer, ya que el Estado neoliberal rescata con el dinero del contribuyente a esos grupos “demasiados grandes para caer” en cuanto les da por tambalearse.

La magia de la política económica se nos muestra entonces con una transparencia cristalina: la reforma de las pensiones –impuesta, como reconoció el propio presidente de la República francesa, para calmar a los mercados sobre su determinación a seguir tomando de los pobres para dar a los ricos– obligará a los asalariados a financiar con su trabajo dos años suplementarios de ganancias, de las cuales una parte desaparecerá en forma de recompras de acciones exentas de impuestos y la otra en paraísos fiscales. El peligro rojo está a nuestras puertas.

La gran quimera del diálogo social

¿Cómo entender la renovada combatividad que da escenario al cambio de línea de sindicatos reformistas? La clave hay que buscarla, muy probablemente, en la historia reciente del “diálogo social”: así se entiende cómo los sindicatos se encontraron en un callejón sin salida, y también lo que les costó salir de él.

14

por **Martin Thibault y Sophie Béroud**, abril de 2023

“La Francia que se manifiesta en la calle es la que trabaja y expresa democráticamente su rechazo a una reforma injusta –se alegraba Laurent Berger en *L’Obs* el pasado 9 de febrero–. Este movimiento se parece a la CFDT”. Pero ¿a qué se parece hoy la Confederación Francesa Democrática del Trabajo? ¿En qué punto se encuentra? En marzo de 2020, codo con codo con el *Mouvement des Entreprises de France* (Medef, la patronal francesa), se disponía a participar en una conferencia sobre la financiación de las pensiones, días antes de que el Gobierno francés abandonara la anterior reforma por la crisis sanitaria. Transcurridos tres años, la prensa presenta a Berger, su secretario general, como el líder de la junta intersindical movilizadora contra el proyecto gubernamental de la primera ministra Elisabeth Borne. Comoquiera que sea, esta vez Berger no se ha amilanado, a diferencia de sus predecesores en otras luchas (1). Muchos analistas han atribuido esta determinación a la adopción, en el congreso de junio de 2022, de una enmienda opuesta a cualquier aumento de la duración de las cotizaciones, votada por el 67% de los delegados contra el criterio de la dirección. ¿Cómo explicar esta inflexión, cuando la confederación lleva unos diez años apoyando la necesidad de aumentar esta duración? ¿Cómo entender la renovada combatividad que da escenario a este cambio de línea? La clave hay que buscarla, muy probablemente, en la historia reciente del “diálogo social”: así se entiende cómo los sindicatos se encontraron en un callejón sin salida, y también lo que les costó salir de él.

La expresión surgió en 1984: el 18 de enero, en la tribuna del Parlamento Europeo, el ministro socialista de Relaciones Exteriores, Claude Cheysson, anunció que la presidencia francesa del Consejo de la Comunidad Europea “tomaría las iniciativas necesarias para buscar, con los actores sociales, la forma de reforzar el diálogo social a escala europea”. En los años siguientes, y luego a lo largo de cuatro décadas, estos dos conceptos –“diálogo social”, “actores sociales”– iban a formar un “sistema léxico-semántico” que, según la politóloga Corinne Gobin, debía propiciar unas “relaciones sociales más armoniosas, vividas como relaciones entre socios orientadas hacia un objetivo común: estimular la competitividad de las empresas” (2). Se impuso así una forma de pensar y, sobre todo, de practicar el sindicalismo dentro de una democracia liberal pacificada, sin antagonismo de clases.

La CFDT se subió al barco de aquella transformación con entusiasmo. Ya a finales de la década de 1970, al fracasar la “segunda izquierda” en el intento de imponer su línea al Partido Socialista francés, la CFDT fue rebajando la apuesta por la política y por las leyes. En el congreso de Brest de 1979, el secretario general Edmond Maire preconizó “centrarse” únicamente en la acción sindical. En otras palabras, un sindicalismo “de propuestas”, en ocasiones calificado de “liberal-sindicalismo” (3). Para la Confederación, servir al interés general exigía ahora buscar compromisos aceptables y ceñirse a una concepción más estrecha de su acción. Se dio valor a las negociaciones sin movilización paralela, “en frío”, según la expresión consagrada. Y ahí no solo estuvo la CFDT: la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CCC), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) y luego la Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) también se adhirieron al tema del diálogo social.

Este alcanzó su apogeo en las décadas de 2000 y 2010. Las organizaciones sindicales francesas se encontraron cada vez más integradas en el paradigma de la gestión empresarial. La ley del 20 de agosto de 2008 les conminaba a participar en una “democracia social” renovada que otorgaba un lugar prominente a la concertación con el fin de desactivar cualquier forma de conflictividad y, en realidad, de domesticar un poco más a los militantes sindicales. La ley del 8 de agosto de 2016, conocida como “ley del trabajo”, priorizaba los acuerdos de empresa, y ya no las disposiciones legislativas o los convenios de rama, en la jerarquía de las normas aplicadas a los asalariados. La negociación

contribuía a debilitar las protecciones colectivas y, como se explica en una nota reciente del laboratorio de ideas Intérêt Général, a “subordinar a los sindicatos al poder de las finanzas y del mercado obligándolos a negociar retrocesos sociales (planes de despido, flexibilización del tiempo de trabajo) con la esperanza de limitar el riesgo de retirada de los accionistas o de mantener la competitividad de la empresa” (4). Por una parte, se asignaba a los sindicatos el estatus de “socios” encargados de acompañar transformaciones a menudo desfavorables para los asalariados; por otra, constata el sociólogo Étienne Pénissat, “una serie de medidas (‘servicios mínimos’, ‘alarma social’, etc.) [...] pretenden desactivar las formas de acción tradicionales del sindicalismo, especialmente la huelga” (5).



VONN CUMMINGS SUMNER.

– *Study for Betrayal Wall III* (‘Estudio para el muro de la traición’), 2018

A los sindicatos que aceptaban integrarse en este marco, las autoridades públicas, los expertos patronales y los medios de comunicación les otorgaban el diploma de organización responsable. Al menos hasta 2017. Desde la elección de Emmanuel Macron, sus Gobiernos han maltratado sistemáticamente a los sindicatos. Poco queda ya del diálogo social a escala nacional cuando los primeros ministros Edouard Philippe, Jean Castex y luego Elisabeth Borne optan por dismantelar por decreto los órganos de representación del personal (IRP, por sus siglas en francés)

o la protección social. Poco futuro tenía la petición de la junta intersindical, el 9 de marzo, de reunirse con el presidente de la República: a pesar de cifras récord tanto de concentraciones (cerca de 300 el 7 de marzo) como de manifestantes (3,5 millones según los sindicatos y 1,28 millones según el Ministerio del Interior en la misma fecha), Borne no se ha dignado reunirse con ella desde la primera jornada de movilizaciones, el 19 de enero. Por suficiencia, el Gobierno francés ha aventurado una presentación muy deficiente de una reforma mal concebida; y por su negativa a dialogar, ha descuidado el potencial beneficio de dividir a la junta intersindical con algunas concesiones.

La desilusión es aún mayor –y preexistía a la reforma de las pensiones– en el ámbito de las empresas. Los representantes tienden a convertirse en expertos, en detrimento de la acción militante sobre el terreno. “En el movimiento sindical de hoy –explica un antiguo responsable de SUD-Rail–, hay una urgencia general y las reuniones las decide la dirección. Es un auténtico drama. Hay compañeros que son muy buenos delegados, pero que no son sindicalistas”. La situación ha ido a peor con los decretos de Macron de 2017. La constitución de los Comités Sociales y Económicos (CSE) ha acentuado la brecha con los asalariados (6). Cuando, además, estos comités se convierten en cámaras de aprobación automática de las decisiones patronales, evidentemente cunde el desánimo, hasta entre los sindicalistas más comprometidos con el diálogo. El descrédito que sufre, a escala nacional y de empresas, explica la presencia de las organizaciones llamadas “reformistas” en la junta intersindical. Combinado ese descrédito con la exasperación general y la brutalidad del Gobierno, las lleva a pensar de nuevo en términos de confrontación.

Esos términos, por supuesto, siguen siendo más moderados que los de otros componentes del mundo sindical. Tras el fracaso de varias movilizaciones interprofesionales, como la de la primavera de 2016 contra la ley del trabajo, los militantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) o de Solidaires han integrado la necesidad de construir una relación de fuerzas muy áspera frente a un Gobierno especialmente intransigente. En el contexto de la movilización actual, esto está provocando fuertes tensiones en la CGT y Solidaires. El 2 de marzo, las federaciones CGT de puertos y muelles, ferrocarriles, industria química, minas y energía, vidrio y cerámica decidieron coordinarse con vistas a huelgas prorrogables.

Hasta la fecha, la junta intersindical, por su parte, ha preferido una postura reactiva y defensiva, acompasándose con el calendario del Gobierno (primera lectura en la Asamblea, primer examen en el Senado, paso por la comisión mixta paritaria). ¿A riesgo de agotar a los militantes de base obligados a movilizarse sin controlar el movimiento ni en la forma ni en los tiempos? Los sectores de la energía o de los transportes siguen teniendo la capacidad de arrastrar a otros, pero ya no, por sí solos, la de bloquear la economía. En la SNCF (ferrocarriles) o en cualquier otro ámbito, hay que adaptarse al debilitamiento de los colectivos laborales, a la represión cada vez más intensa (en el trabajo, en los piquetes o en las manifestaciones), así como al acotamiento cada vez más estricto del ejercicio del derecho de huelga. Los trabajadores de las refinerías, en otoño de 2022, y los de la recogida de basuras de París, en marzo de 2023, fueron requeridos por la prefectura, contraviniendo la opinión de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). En su informe de noviembre de 2011 (caso n.º 2841), su Comité de Libertad Sindical había pedido expresamente al Gobierno francés que “no recurriera a la imposición unilateral de la medida” en tales circunstancias y que favoreciera “la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas en este ejercicio”.

Pese a estas disposiciones y a la campaña de comunicación desplegada, la movilización sigue ganando apoyo. Desde principios de 2023, tanto la CGT como la CFDT han constatado un aumento significativo de las afiliaciones. “Vemos llegar a empleados aislados o que quieren crear un sindicato en su empresa –explica un secretario general del sindicato UD Force Ouvrière (FO)–. En el Jura estamos hablando de 80.000 trabajadores activos... Así que hacer 50 carnés en dos meses y medio es colosal para nosotros” (7). Según las confederaciones, una quinta parte de estas solicitudes de afiliación correspondería a menores de 30 años (menos del 3% de los afiliados a un sindicato en 2019, según el Ministerio de Trabajo). Esto es un buen espaldarazo para los sindicalistas de a pie, como también lo son las manifestaciones en los municipios pequeños.

Estas marchas también traen necesariamente el recuerdo de las acciones de los “chalecos amarillos”. Su capacidad para hacer que el Gobierno diera un paso atrás, pero también para sacudir los desgastados códigos rutinarios de la manifestación, ha dejado huella en bastantes sectores

sindicales, donde hay mucho deseo de confrontación. Este se expresó con algo de descontrol ya tras la decisión de la primera ministra Borne, el 16 de marzo, de plantear la cuestión de confianza para imponer la reforma, tanto a los parlamentarios como a una población empeñada en rechazarla. Varias tardes seguidas, por iniciativa de los sindicatos locales, miles de personas se manifestaron en París, Lyon y Marsella, pero también en Brest (15.000 manifestantes según la CGT el 18 de marzo, 6000 según la policía), Caen, Dijon, Roanne o Saint-Étienne. En los desfiles, pensionistas, estudiantes, el mundo laboral, casullas fluorescentes. Y mucha determinación.

- (1) Véase Jacques Kergoat, “Les syndicats français mis au défi”, y Martine Bulard, “Financer les retraites autrement”, *Le Monde diplomatique*, respectivamente marzo de 1996 y julio de 2003.
- (2) Corinne Gobin, “Dialogue Social”, en “Nouveaux mots du pouvoir: fragments d’un abécédaire”, *Quaderni*, n.º 63, 2007.
- (3) Véase Jean-Claude Aparicio, Michel Pernet y Daniel Torquéo, *La CFDT au péril du libéral-syndicalisme*, Syllepse, París, 1999. Véase también Jean-Michel Dumay, “CFDT, un syndicalisme pour l’ère Macron”, *Le Monde diplomatique*, junio de 2017.
- (4) “Que peut l’État pour renforcer le syndicalisme? Réhabiliter les syndicats dans leur rôle de contre-pouvoir”, *Intérêt Général*, nota n.º 28, enero de 2023, interetgeneral.net
- (5) Etienne Pénissat, “A l’ombre du ‘dialogue social’”, *Agone*, n.º 50, 2013.
- (6) Véase Sophie Bérout y Jean-Marie Pernet, “La grève, malgré tous les obstacles”, *Le Monde diplomatique*, marzo de 2020.
- (7) Citado por Agathe Ranc, “Le printemps des syndicats”, *L’Obs*, 16 de marzo de 2023.

Martin Thibault y Sophie Bérout

Respectivamente: profesor e investigador en sociología. Autor, junto a Sophie Bérout, de *En luttres! Les possibles d’un syndicalisme de contestation*, Raisons d’agir, París, 2021 y profesora titular en Ciencias Políticas, Universidad Lyon-II-Triangle. Autora, junto a Martin Thibault, de *En luttres! Les possibles d’un syndicalisme de contestation*, Raisons d’agir, París, 2021.

“¡Hay que apañarse con lo que tenemos!”

Conciliar el apoyo popular y la relativa debilidad de las fuerzas movilizadas sobre el terreno: ese es el reto al que se enfrentan los militantes sindicales. Lo abordan con mayor o mejor fortuna, pensando en el largo plazo.

20

por **Pierre Souchon**, abril de 2023

—¿Dónde han puesto los palés? No veo nada...

Al amanecer de este martes 21 de marzo, en esta rotonda del área industrial de Les Herbiers (departamento de la Vendée), los militantes se buscan entre la oscuridad y el frío. La madera empieza a apilarse sobre la calzada para luchar contra la reforma de las pensiones, pese a haber sido aprobada la víspera por el Parlamento: “Nos las hemos arreglado solos con este corte de carretera porque nuestra intersindical de la Vendée no estaba a favor. Está claro que a algunos de ellos les parece un poco demasiado radical”, se lamenta François, de la unión local en La Roche-sur-Yon de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los palés empiezan a arder. Un primer camión toca el claxon en señal de solidaridad.

—¿Son de los sindicatos? —pregunta una mujer de unos cincuenta años al volante de su coche de trabajo.

—Sí, señora. De la CGT.

—¡Ah! No puedo quedarme a hablar con ustedes porque me tienen geolocalizada, pero son mi salvación. Quiero sindicarme. Soy empleada doméstica, lo estamos pasando fatal en mi empresa y, visto lo molida que me tienen, me da que nunca llegaré a los 64...

Valérie, sindicalista en una mutua, le garrapatea su número a toda prisa: “Si con esta acción solo hubiéramos logrado conocer a esta señora, ya habría sido un éxito”.

Conforme pasa la mañana, el “bloqueo de la actividad económica” previsto se transforma en una barricada porosa con distribución de octavillas: aunque la treintena de militantes aquí presentes no basta para cortar del todo la circulación como tenían previsto, sí que consiguen exasperar a la gendarmería local, que no les pasa por alto ni un palé. “¡Hay que apañarse con lo que tenemos!”, dice Kamel, empleado de la eléctrica Enedis. “Lo que tenemos” es, a unos cuantos metros, un área industrial con cerca de 5000 empleados, de los cuales ninguno está en huelga. “Lo que tenemos” son esos mismos empleados que acuden al trabajo tras agarrar las octavillas y que en su mayor parte animan a los militantes presentes, agradeciéndoles sus actos de protesta. Pero, fuerza es decirlo, estos últimos están un poco hartos. Solo un poco. Hartos de las protestas realizadas –en lo que dan de sí sus recuerdos de militancia, la prefectura de la Vendée jamás ha conocido manifestaciones tan grandes como las de este invierno–, hartos de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de bocinazos de los conductores que no se convierten en protestas, paros o huelgas en los lugares de trabajo. Todos enumeran las causas con un acento de fatiga: la resignación, el fatalismo, el individualismo, las dificultades financieras... Y, sin embargo, todos traen algo: un palé, un termo de café, risas, ramas de árboles o rimeros de octavillas. Todos siguen en la brecha.

Desde luego, es una contradicción profunda que también viven los ferroviarios de la CGT de La Roche-sur-Yon, que nos invitan a comer –copiosamente– en su local. Están en huelga prorrogable –la palabra acaso haga soñar a algunos, pero no a ellos–: “Aquí los colegas siempre están en huelga, es un núcleo duro”, advierte Olivier. Todos lamentan no haber logrado involucrar a otros en su movimiento: “Lo peor es que nada les importa un bledo [sic] –se lamenta Olivier–. A pesar de los pocos que estamos en huelga, hemos conseguido ralentizar la actividad. Así que se pasan el día jugando al [videojuego] Candy Crush en el móvil...”. Este sindicalista acusa a la “conciencia política o sindical” de los asalariados, que supone muy escasa. Podría objetársele que la “conciencia” de la injusticia de esta reforma está mayoritariamente extendida, como lo atestiguan todas las encuestas de opinión publicadas. “Eso es verdad –admite Sébastien–, pero es una oposición apoltronada. No es fácil conseguir que la gente pase del estado de rebelión delante de la televisión a la acción de inmovilizar su herramienta de trabajo para hacer que un Gobierno dé marcha atrás...”. Pese a ello, todos siguen en la brecha.

Éric también es de los que siguen. Este sindicalista de la CGT de Airbus en Nantes (departamento Loira Atlántico) parece haber resuelto la contradicción: “Hay que asumir una militancia sin resultados”. Tanto a él como a su colega Jimmy les preguntamos: siendo 150, recientemente lograron cortar por completo una rotonda durante varias horas, ¿acaso no es un buen resultado? “Es una muestra de debilidad –espeta Jimmy–. Si tomáramos solo los votos que ganamos en las elecciones a delegados de personal, deberíamos haber sido más de mil...”. Así que parece que hay que aceptar una militancia sin grandes resultados: “Lleva mucho tiempo trabajar la conciencia de la gente –prosigue Éric–. Puede que nunca recojamos los frutos de lo que hicimos en vida. Pero las ideas calan, incluso de maneras que no conocemos. Entretanto, hay que seguir. Y, sobre todo, deshacerse del culto a la inmediatez: las jóvenes generaciones que vemos llegar a la fábrica están muy imbuidas de él. Para las conquistas sociales, eso no sirve...”.



VONN CUMMINGS SUMNER.
– *Warrior Moving His House* (‘Guerrero desplazando su casa’), 2011

Jimmy le hace coro invitando a reconsiderar nuestra relación con el tiempo: “Trabajamos al ritmo que nos marcan, nos fijan objetivos hora tras hora, se nos computa cada minuto... Es el tiempo en su forma capitalista. Debemos reapropiarnos del tiempo largo, nuestro tiempo”. Y aceptar resolver una nueva contradicción: Éric, operario de control numérico –“nosotros lo llamamos ‘aprietabotones’”, dice–, reivindica el orgullo de ser un trabajador manual. “Pero es muy duro pasar del curro

en la fábrica a la tarea de persuadir. En el taller, al final de la jornada, sé qué he hecho con mis propias manos, y eso es gratificante. En el trabajo de militancia con los trabajadores, el día a día de la labor sindical, no obtengo ningún resultado concreto como en el otro. Lo que hacemos es intangible...”. Éric y Jimmy siguen ahí. Sobre todo, porque la intersindical sigue unida, lo cual, a juzgar por lo que dicen, es un activo considerable: para estos militantes de la CGT acostumbrados a la tradicional dominación de Fuerza Obrera (FO) en Airbus –a menudo calificado de “sindicato amarillo”–, la presencia de la confederación FO en la intersindical, nunca desmentida hasta el momento, ha contribuido de forma masiva a reforzar las filas de manifestantes y huelguistas.

“Nos hicieron falta tres días”. Por un momento creemos que Jean-Marie, militante de la CGT en la agroalimentaria Fleury-Michon, con más de 2000 empleados en la Vendée, se ha plegado al culto de la “inmediatez”. “Tres días de huelga para que los deshuesadores de la fábrica, todos juntos, consiguieran sus aumentos”, explica. O sea, rápido, eficaz e inmediato, ¿no? Pero Jean-Marie salta: “¡Tres días de huelga son muchos! ¡Eso hay que aguantarlo! Por no hablar del trabajo de concienciación previo, que había durado meses, sino años...”. Sentado a su lado, Mickaël recuerda cómo en sus primeros años de trabajo en ese buque insignia de la industria agroalimentaria no encontró nada que objetar, “no estaba concienciado”. Fue el caso de un trabajador amigo, amenazado injustamente con el despido, lo que le “abrió los ojos”. Se sindicó cuando la CGT pasaba por sus peores momentos en la fábrica; quince años después, está a escasos votos de ser mayoritaria en la empresa. El “tiempo largo” ha permitido movilizar a un 10% de huelguistas en Fleury-Michon durante las jornadas en defensa de las pensiones. Mickaël deplora ese nivel de movilización, a la vista de lo que está en juego. Luego rectifica: es muy alto, a juzgar por el del resto de la masa asalariada industrial. Jean-Marie y Mickaël siguen en la brecha.

“Descubrí la esclavitud”. Béatrice parece una mujer comedida. Cuando esta asistente doméstica afiliada a la CGT nos habla de los comienzos de su carrera, uno también se entera de que ha usado la palabra con propiedad: condiciones de trabajo, sobrecarga mental y, sobre todo, física. “Por suerte, enseguida conocí a unas compañeras estupendas. Después del trabajo nos veníamos a tomar algo en el salón de mi casa, con mis caniches”. Al oír eso, uno no puede sino sospechar segundas

intenciones proselitistas. Béatrice sonríe. Asegura que lo ignoraba todo sobre el compromiso, que no era “consciente” de que esos instantes de convivencia de fin de jornada acabarían convirtiéndose un día en reuniones sindicales. Y es que, a fuerza de compartir su día a día, sus dificultades, un pastel y un café, ese puñado de jóvenes acabaron por decretar colectivamente un “basta ya”. A comienzos de la década del 2000, eligieron a Béatrice enlace sindical. “Me acuerdo de los comienzos: no entendía nada. Me limitaba a enumerarle amablemente a nuestro jefe, cara a cara, lo que no iba bien. Nuestras condiciones eran tan inhumanas que estaba convencida de que acabaríamos por entendernos. ¡Al fin y al cabo, los dos éramos seres humanos, podía comprenderme! El problema era que, en efecto, comprendía perfectamente por lo que pasábamos. Y me respondía: ‘Ya, es duro para ustedes. Pero así son las cosas. Y si no están conformes, da lo mismo’”. “Eso me dejaba de piedra –añade Béatrice con voz dulce–. No sabía que estaba descubriendo la lucha de clases. Ignoraba su existencia, que alguien pudiera negarse a escucharme solo porque tenía intereses distintos de los míos”. En opinión de Béatrice, cualquier comparación con la deriva autoritaria –artículo 49.3 mediante– y otras críticas sobre la “sordera” del actual Gobierno es cualquier cosa menos fortuita... Pero se encontró con que, después de haber hecho las primeras huelgas –muy poco comunes en su sector–, ese “alguien” acabó por escuchar a Béatrice. Veinte años después de la creación del sindicato, Béatrice registra un 10% de huelguistas en su asociación de asistentes domésticas durante las recientes movilizaciones en la Vendée contra el proyecto de la primera ministra Élisabeth Borne. Trabajó mucho tiempo sin resultados, asumió el tiempo largo. Subraya que un 10% de huelguistas es una victoria patente. Está convencida de que, si la reforma de las pensiones no se retira, esto entrará a formar parte de la “lucha de clases”, en la que se puede “perder una batalla, pero no la guerra”. Béatrice sigue en la brecha.

Denis, por su parte, está contento. El bloqueo de la escuela técnica donde este sindicalista enseña matemáticas fue efímero, pero inédito. Y exitoso. Uno de sus colegas les dio un impresionante montón de madera cortada por sus propios medios en el bosque, muy útil para obstruir las entradas al establecimiento. “Cuando ese colega llegó a nuestro cole en 2018, me cachondeaba de él en su cara: era tan fanático de Macron, le tenía tal adoración, que podía pasarse cinco horas seguidas viéndolo participar en sus grandes debates. No se perdía ni uno. ¡Nadie en este

país ha conseguido algo así!”. Magnánimo, Denis no le guardaba rencor y lo invitaba a jugar a las cartas después de las clases con otros colegas. “Nos reunimos todos los viernes en un bar cerca de la escuela. Entre cerveza y cerveza, echamos unas partidas de la *belote*. Y sobre todo hablamos, de todo y de nada. También de política. Así fue cómo, en cinco años, mi colega pasó del gran debate a traer remolques de madera para bloquear la escuela. Hicieron falta cinco años de la *belote*”. ¿El tiempo largo? “¡No! ¡Cinco años es rápido!”. Denis suelta una carcajada. Denis seguirá en la brecha.

Pierre Souchon
Periodista.

El buen uso de la Constitución

¿Es razonable esperar que los “sabios de la *rue de Montpensier*” revoquen, de forma total o parcial, la ley de reforma de las pensiones? El Consejo Constitucional francés sigue siendo en esencia un órgano político que casi nunca muestra voluntad de enfrentarse a los poderes fácticos.

26

por **Lauréline Fontaine**, abril de 2023

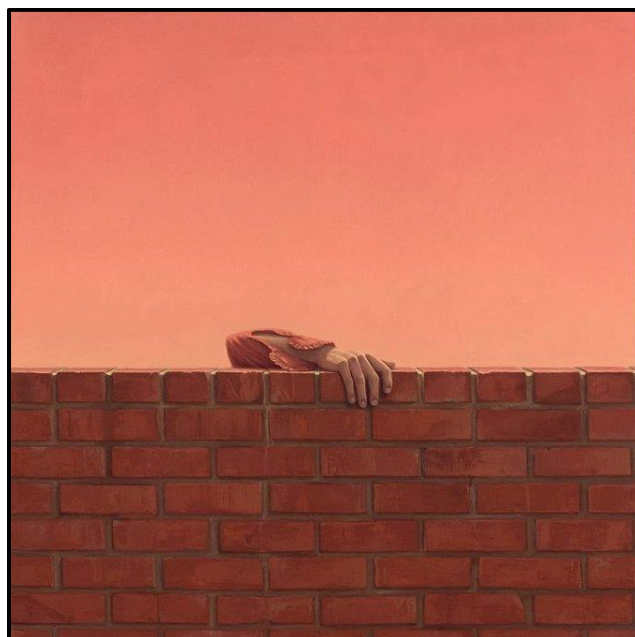
Artículo 49.3. Pero también 47.1 (para agilizar el examen del texto). Y 44.3 (para obligar al Senado a hacer una única votación, sobre el conjunto del texto). Desde que el gobierno francés anunció su proyecto de reforma de las pensiones el pasado mes de enero, estos artículos de la Constitución han sido objeto de numerosos comentarios. El fracaso de las dos mociones de censura en la Asamblea Nacional el pasado 20 de marzo confiere la máxima importancia al recurso presentado ante el Consejo Constitucional (el equivalente del Tribunal Constitucional): en él radicaría la última esperanza de hacer fracasar las maquinaciones de un poder inflexible frente a las movilizaciones. Los jueces deberán intervenir por dos series de motivos. En primer lugar, hay varias medidas que son consideradas *cavaliers sociaux* (1), así que no tendrían por qué figurar en un proyecto de ley rectificativa de financiación de la Seguridad Social (PLRFSS); un ejemplo es la creación de un índice de los llamados trabajadores “senior”, ya que no tiene ningún impacto sobre las cuentas sociales. En segundo lugar, el Consejo Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la hipótesis de una utilización abusiva del procedimiento previsto en el artículo 47.1 de la Constitución desde 1996, cuyo objeto ciertamente no era decidir sobre cuestiones sociales tan determinantes como la edad legal de jubilación, privando además eventualmente al Parlamento de su derecho de voto al término de un periodo de 50 días.

No obstante, las esperanzas depositadas en una intervención del Consejo se sustentan en que, desde hace tiempo, la narrativa constitucional ha creado un imaginario amable, según el cual el Consejo Constitucional

ejerce de guardián y garante de la norma suprema. Reforzados por un público universitario poco crítico y medios de comunicación desinformados, los “sabios de la *rue de Montpensier*” gozan de una buena imagen (2) que no se corresponde con la realidad de unos derechos y libertades recortados desde hace años ni con su jurisprudencia particularmente favorable a los intereses económicos de los más poderosos. El Consejo Constitucional ha validado la evolución neoliberal del marco jurídico francés, promovida durante años por los sucesivos gobiernos, dándole incluso una base constitucional. Por lo tanto, está asociado al poder, cuya filosofía respalda casi por sistema, y no es un contrapoder. Seamos o no partidarios de semejante régimen político, es forzoso señalar que ni su composición ni sus medios ni su funcionamiento lo sitúan a la altura de lo que la democracia representativa exige. Lo consideramos juez, pero no lo es. Lo imaginamos por lo menos independiente, digamos equitativo, y no lo es en absoluto. Queremos creer que no está sujeto a influencias externas y, de nuevo, nos engañamos. Y ese cúmulo de incurias se traduce en resoluciones que tienen la particularidad de imponer una versión sesgada y cuestionable de la Constitución por cuyo cumplimiento vela.

Entre los muchos problemas que afectan al Consejo Constitucional está en primer lugar el de la imparcialidad. Casi todos los miembros del Consejo Constitucional deben pronunciarse constantemente sobre la suerte de antiguos colegas o sobre textos que han contribuido a redactar o implementar. En otras palabras, son juez y parte, habida cuenta de las leyes sobre las que se pronuncian o la regularidad de las elecciones legislativas, senatoriales o presidenciales. Desde los primeros nombramientos en 1959, las tres máximas autoridades del Estado –el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Asamblea Nacional– nombran cada una tres miembros de los nueve que componen el Consejo Constitucional, con, desde 2010, el aval de una comisión parlamentaria. Sin embargo, estas autoridades conciben la justicia constitucional como una antecámara de su propio poder, “un retiro dorado para personalidades cercanas a la corte” en palabras del jurista Alain Supiot. Entre los miembros actuales encontramos dos ex primeros ministros (Laurent Fabius y Alain Juppé), dos ex ministros (Jacqueline Gourault y Jacques Mézard), un ex parlamentario (François Pillet), dos ex directores de gabinete ministerial (Véronique Malbec y François Seners) y una ex secretaria general de la Asamblea Nacional (Corinne Luquiens). Todos los sucesivos presidentes del Consejo

Constitucional, designados por el presidente de la República, han sido diputados, ministros, presidentes de la Asamblea Nacional o primeros ministros; Laurent Fabius en concreto ha desempeñado todas esas funciones. Dirigía el Ministerio de Asuntos Exteriores cuando en 2016 François Hollande lo situó al frente del Consejo de la rue de Montpensier.



VONN CUMMINGS SUMNER.
– *The Brick Wall* ('El muro de ladrillos'), 2005

De ese modo, Fabius participó en una deliberación sobre la ley relativa al trabajo, la modernización del diálogo social y la estabilización de las carreras profesionales (la llamada ley El Khomri) pese a que el proyecto había sido aprobado por el Consejo de Ministros cuando él mismo era el número dos del gobierno (resolución n.º 2016-736 DC de 4 de agosto de 2016). Más recientemente, Jacqueline Gourault verificó la constitucionalidad de un texto que, a petición de los promotores inmobiliarios, limitaba el derecho a interponer un recurso contra un permiso de construcción y que, como ministra, había defendido, aprobando incluso su circular de aplicación (resolución n.º 2022-986 QPC de 1 de abril de 2022). A veces, estas apariencias de parcialidad adoptan un giro sórdido. Así, en el momento en el que el Consejo Constitucional anuló la condena por acoso sexual del demandante Gérard Ducray, antiguo Secretario de Estado (resolución n.º 2012-440 QPC de 4 de mayo de 2012), cuatro miembros del Consejo habían

tenido vínculos profesionales con él y dos de ellos participaron en la decisión.

Sea como fuere, las personalidades designadas –y también las no designadas, puesto que los expresidentes de la República son miembros de oficio de la institución– conocen los resortes del poder. Y le tienen estima, al punto de ser reacias a alejarse de él; en todo caso, rara vez tienen las competencias que, precisamente, les permitirían tomar distancias. Actualmente, solo un miembro del Consejo tiene una sólida cualificación en derecho y una experiencia jurídica significativa. Los miembros tampoco pueden contar con una ayuda a la altura de su cometido. En el extranjero, los jueces constitucionales, siempre titulados en derecho, tienen varios auxiliares, ellos mismos muy cualificados; en Francia, los miembros del Consejo no tienen ninguno. Por fuerza, es el juicio político lo que les sirve de brújula. El Consejo se ve así abocado a “servirse” del derecho, más concretamente de la Constitución, y a hacerla pasar por lo que no es. Si, por ejemplo, declara que el interés general es un “objetivo de valor constitucional”, habitualmente lo hace sobre la base de lo que el legislador –y por lo tanto el gobierno, que siempre es el “defensor” oficial de la ley frente a él en caso de controversia– declara de interés general, lo que equivale a otorgarle el poder de decidir por sí mismo qué está recogido en la Constitución.

No se encuentra rastro en el Consejo Constitucional de ese esfuerzo por examinar el sentido del proyecto constitucional, como se puede encontrar en muchos otros tribunales constitucionales o supremos de democracias comparables. Nunca se aprecia una lectura atenta y completa de la Constitución, y las resoluciones son declaraciones sin ninguna clase de argumentación: en todas sus resoluciones, el Consejo declara que tal o cual ley es contraria o no a la Constitución porque dice lo que dice... pero no sabemos por qué motivos lo que dice es contrario o no a la Constitución. En la resolución n.º 2014-440 QPC de 21 de noviembre de 2014, por ejemplo, tras limitarse a copiar algunas de las normas legales que organizan la “ayuda jurisdiccional” (3), sostiene sin mayores explicaciones “que de lo anterior resulta que el procedimiento de obtención de la ayuda jurisdiccional no se ajusta, en cualquier caso, al sentido del artículo 61.1 de la Constitución, un procedimiento en curso con motivo del cual se puede plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad; que las solicitudes son por lo tanto improcedentes”...

sin que tengamos la menor idea de por qué (incluso cuando uno está familiarizado con esta jerga).

La “pobreza intelectual” en la que vive actualmente el Consejo Constitucional, según confiesa uno de sus antiguos miembros, va de la mano de su permeabilidad a las influencias. Sobre todo, a la influencia de los intereses económicos, que ha prosperado desde hace años en la mayor opacidad. Pese a ello, exmiembros del Consejo admiten que los escritos enviados por esos *lobbys* y redactados por finas plumas del derecho les son de gran ayuda, tanto para comprender la ley como la Constitución. Confesión de impotencia pero también de liviandad, como la de Jean-Louis Debré cuando explica que durante su mandato como presidente del Consejo Constitucional almorzaba regularmente con el presidente del Movimiento de las Empresas de Francia (Medef, la patronal) y dirigentes empresariales para hablar sobre la jurisprudencia del Consejo. Debré, por ejemplo, escribe: “Almuerzo con una decena de empresarios a quienes conocí durante la preparación de nuestra resolución sobre la ley de finanzas de 2012. [...] Me agradecen que les haya invitado y que les escuche con regularidad. Naturalmente, solo puedo mostrarme satisfecho” (4). Transpuesto a otra jurisdicción, es como si el primer presidente de la Corte de Casación estuviera almorzando con las partes de un proceso en curso o pendiente de celebrar.

La colaboración mantenida con el poder tiene una primera consecuencia: las restricciones impuestas a las libertades individuales y colectivas son fácilmente validadas, llegándose a aceptar la violación manifiesta de la Constitución en que incurrió el legislador cuando, al comienzo del periodo de la pandemia de covid-19, decidió suspender temporalmente la obligación de examinar una cuestión prioritaria de constitucionalidad, es decir, la posibilidad de que se reconociera la inconstitucionalidad de una ley (n.º 2020-799 DC de 26 de marzo de 2020). El pasado 25 de noviembre, el Consejo fue aún más lejos al admitir en una resolución lo que antes le habría parecido inconcebible, a saber, la posibilidad de realizar controles de identidad sin ningún límite en Mayotte (resolución n.º 2022-1025 QPC de 25 de noviembre de 2022). Lo que equivale a convertir la isla en un territorio no sujeto al derecho constitucional.

Tan atento a las expectativas del poder económico como a las del ejecutivo, el Consejo Constitucional censura lo que considera que constituye un obstáculo al desarrollo del mercado (la lucha contra el fraude o la evasión fiscal) o a su supremacía (la autorización para vender semillas campesinas, resolución n.º 2018-771 DC de 25 de octubre de 2018). Lo decide en nombre de principios como el de la libertad de empresa, que no aparecen expresamente en los textos del bloque de constitucionalidad, pero cuyo valor constitucional garantiza. Siguiendo el mismo principio, los jueces también censuraron disposiciones de la ley relativa a la economía social y solidaria que preveía la posibilidad de anular una cesión empresarial si esta se efectuaba sin haber informado a los asalariados, privándolos de su capacidad de presentar una oferta de compra (resolución n.º 2015-476 QPC de 17 de julio de 2015).

Por el contrario, los *sabios* ignoran aquello que, en los textos con valor constitucional, contradiría su visión de la sociedad. En particular el preámbulo de la Constitución de 1946, que tiene valor constitucional y afirma, entre otras cosas, que “todo trabajador participa, por medio de sus delegados, en el establecimiento colectivo de las condiciones laborales, así como en la gestión de las empresas”. Ignorando igualmente la idea de una república social, cuyo principio está consagrado en el artículo 1 de la Constitución francesa (5), el Consejo ha validado sin pestañear el giro neoliberal de las políticas públicas en Francia. Un antiguo miembro del Consejo, Georges Vedel, declaró que este no tenía por qué apoyar una doctrina económica en particular, porque la Constitución era neutral. Sin embargo, ese mito de la neutralidad económica de la Constitución, procedente de Alemania e intencionalmente repetido desde hace tantos años (6), es una simpleza y responde a una voluntaria ceguera frente a la vertiente social del texto constitucional. En efecto, no hay más razones para situar la libertad de contratación y de empresa en la cúspide de la jerarquía de las normas constitucionales que para privilegiar la efectividad de las disposiciones sociales del texto constitucional.

- (1) En Francia, un “jinete social” (*cavalier social*) es toda disposición cuya presencia en una ley de financiación de la seguridad social (LFSS) no remite ni al ámbito exclusivo de las LFSS ni de su ámbito facultativo; un supuesto prohibido por la Constitución. (N. del T.)
- (2) Véase Anne-Cécile Robert, “¿Habéis dicho ‘sabios’?”, *Le Monde diplomatique en español*, abril de 2013.
- (3) En Francia, la “ayuda jurisdiccional” (*aide juridictionnelle*) del Estado permite sufragar los gastos judiciales de las personas con bajos ingresos. (N. del T.)

(4) (4)

(5) Cf. Lauréline Fontaine y Alain Supiot, “Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale?”, *Droit social*, n.º 9, septiembre de 2017.

(6) Léase F. Denord, R. Knaebel y P. Rimbart, “El ordoliberalismo alemán, una jaula de hierro para el Viejo Continente”, *Le Monde diplomatique en español*, agosto de 2015.

Lauréline Fontaine

Profesora de derecho público y constitucional de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Autora de *La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel*, Éditions Amsterdam, París, 2023.

32

Fuente del Dossier:

Le Monde Diplomatique, edición digital en español, abril de 2023